

MACARENA CERDA MORALES

Según anunció el Presidente José Antonio Kast, el proyecto de ley asociado a su Plan de Reconstrucción Nacional en materia de ajuste fiscal será presentado en los próximos días al Congreso. De acuerdo con lo que adelantó Hacienda, se incluirán límites a la gratuidad universitaria, en línea con el informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, publicado en septiembre pasado. Este insumo sería la base para los ajustes, anticipó el ministro Jorge Quiroz, los que se suman a la orden de recortar un 3% del presupuesto en todas las carteras.

Una de las medidas planteadas es revisar las dotaciones de docentes y asistentes de la educación en el sistema público, ante lo que el documento de la comisión describe como “potenciales sobredotaciones”. Para ello se propone “mecanismos para la reducción de las dotaciones”, que podría traducirse en una disminución de \$169.241 millones del gasto en el mediano plazo.

Otra línea de ajuste sugiere eliminar el traspaso automático de docentes y asistentes desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), estableciendo en su lugar mecanismos de ingreso mediante concurso público. Este punto, junto a medidas como incentivos al retiro, podría generar un efecto fiscal cercano a \$45.783 millones, según el informe.

Asimismo, se propone incorporar un criterio de edad en la asignación de gratuidad, restringiendo el acceso al beneficio a quienes inicien estudios universitarios después de los 30 años. Según la estimación del documento, esta fórmula podría reducir el gasto en \$80.848 millones en el mediano plazo.

Datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) señalan que el grupo de alumnos de 30 años o más pasó de representar 10,3% de la matrícula en 2010 a 21,2% en 2025, aumento que se concentra principalmente en carreras técnicas y profesionales, donde estos alumnos ya superan el 30% de los matriculados, mientras que en las licenciaturas se mantienen en cerca del 7%.

Con todo, en 2025 había casi 26 mil personas sobre 30 años con el beneficio en todo el sistema: el 66% corresponde a estudiantes de la educación TP, quienes no serían afectados por la restricción.

Además, el informe propone modificar el mecanismo de expansión de la gratuidad en educación superior, que actualmente contempla su ampliación automática hacia deciles de ingreso superiores mediante un “gatillo” macroeconómico. Esto podría significar una reducción del gasto público de \$456.502 millones en el largo plazo.

Proyecto de ley del Ejecutivo también buscaría cambios en los SLEP

No solo gratuidad: Recortes en Educación también apuntarían a reducir “sobredotación” docente

Medidas van en la línea de informe de comisión de expertos que realizó propuestas en 2025 para contener presiones de gasto. La cartera enfrenta un déficit que supera los \$250 mil millones para subvenciones. Llamam a que recursos financien a “grupos más vulnerables”.



MEDIDAS. — También se contempla fortalecer los mecanismos de asignación socioeconómica de los beneficios estudiantiles para evitar accesos indebidos a la gratuidad.

“Tiene que ser gradual”

Sergio Granados (PS), exdirector de Presupuestos de Michelle Bachelet, fue parte de la comisión que generó dicho informe, y señala que “encuentro muy interesante que se incluyan (estas medidas) por parte del actual Ejecutivo, porque fueron estudiadas y propuestas con mucho rigor técnico y en el espíritu de disminuir futuras presiones de gasto. Esto fue unánime en la comisión”. Pero remarca: “Esto tiene que ser gradual”.

El presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Santiago González, dice considerar que “esto es positivo, porque son medidas que logran controlar el gasto, porque hay que partir de la base de que el sistema de financiamiento de la educación superior está desfinanciado. Por lo tanto, no hay recursos”.

En tanto, Lucas Palacios, rector de Inacap, dice que “debemos hacer cambios con urgencia para que los recursos del Estado tengan un mayor impacto, es decir, que se enfoquen en

“*(Estas medidas) fueron estudiadas y propuestas con mucho rigor técnico y en el espíritu de disminuir futuras presiones de gasto*”.

SERGIO GRANADOS
EXDIRECTOR DIPRES

“*Son medidas que logran controlar el gasto, porque hay que partir de la base de que el sistema de financiamiento de la educación superior está desfinanciado*”.

SANTIAGO GONZÁLEZ
PRESIDENTE CUP

“*El impacto que esto puede tener en educación puede ser muy negativo. Educación es un área, a nuestro entender, deficitaria, incluso con los presupuestos actuales*”.

MARIO AGUILAR
PRESIDENTE COLEGIO DE PROFESORES

el financiamiento de aquellos grupos más vulnerables y en las carreras y programas de estudio más requeridos por el país. En este sentido, la educación técnico-profesional ocupa un rol estratégico en todo el mundo y también en Chile”.

Colegio de Profesores anticipa impacto “negativo”

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, admite su inquietud: “Estamos bastante preocupados con los anuncios que se hacen de recortes, porque el impacto que esto puede tener en educación puede ser muy negativo. Educación es un área, a nuestro entender, deficitaria, incluso con los presupuestos actuales. Entonces, si se está pensando en que los recortes podrían tocar a la educación, nos parece gravísimo”. Y acota: “No creemos que haya sobredotación docente”.

A juicio de Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, “la evidencia muestra que la sobredotación de horas puede coexistir con la escasez docente de otra disciplina en un mismo territorio. La necesidad de profesores en áreas como Ciencias u otras disciplinas, especialmente en algunas regiones extremas, es una urgencia para el país, lo que nos llama a generar mecanismos e incentivos de asignación de la dotación existente e incluso atraer más talento docente al sistema. No debemos olvidar que todo ahorro financiero en educación es una oportunidad de reasignar estos recursos para mejorar la calidad de los aprendizajes, fortalecer el bienestar docente y potenciar la innovación educativa”.

En tanto, desde el entorno del saliente Ministerio de Educación estiman que algunas de las medidas podrían tensionar aún más las finanzas de la cartera, que ya tiene un saldo mayor a los \$250 mil millones no cubierto para pagar las subvenciones. Dicen que un recorte adicional cercano al 3% sería complejo de absorber sin afectar la gestión del sistema.